

Congreso de la República
Guatemala, C.A.



00000028

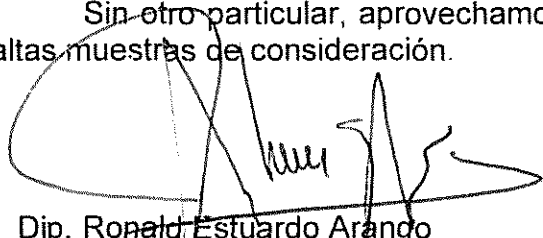
Guatemala 18 de septiembre de 2016

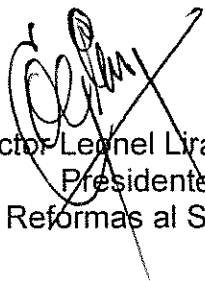
Licenciado
Luis Eduardo López Ramos
Encargado del Despacho
Dirección Legislativa
Congreso de la República

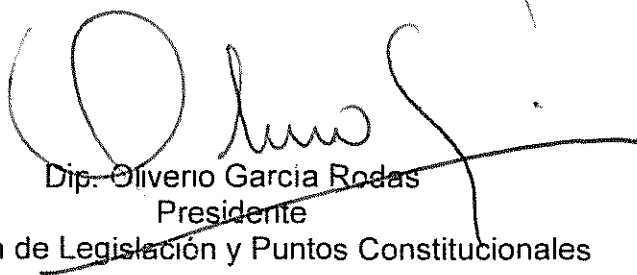
Estimado Licenciado López:

De manera atenta me dirijo a usted de conformidad con lo regulado en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, adjunto el **DICTAMEN FAVORABLE CONJUNTO**, emitido por las Comisiones de Derechos Humanos, Reformas al Sector Justicia y Legislación y Puntos Constitucionales, el día 03 de agosto de 2016, a la **Iniciativa de Ley número 5100**, que dispone aprobar la **"LEY DE ABOLICION DE LA PENA DE MUERTE"**.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle las más altas muestras de consideración.


Dip. Ronald Estuardo Arango
Presidente
Comisión de Derechos Humanos


Dip. Héctor Leñel Lira Montenegro
Presidente
Comisión Reformas al Sector Justicia


Dip. Oliverio García Rodas
Presidente
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales



000000029

*Comisión de Derechos Humanos
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

DICTAMEN

INICIATIVA NÚMERO 5100

"LEY DE ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE"

HONORABLE PLENO

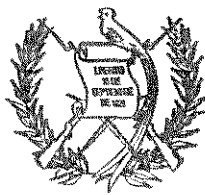
ANTECEDENTES

Con fecha dieciséis de julio de dos mil dieciséis, el Honorable Pleno conoció y remitió, para su estudio y dictamen, a las Comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales, Reformas al Sector Justicia y Derechos Humanos, la iniciativa de ley número 5100, presentada por los representantes Ronald Estuardo Arango Ordoñez, Juan Carlos Josué Salanic García y compañeros, la cual propone aprobar la Ley de Abolición de la Pena de Muerte. El anteproyecto de ley fue firmado y presentada por 36 diputados y diputadas de distintas bancadas del Congreso de la República.

DEL CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa de ley de abolición de la pena de muerte, fundamenta en su exposición de motivos aspectos de posiciones en contra de la pena de muerte, refleja cómo ha avanzado el movimiento abolicionista a nivel mundial, toca aspectos fundamentales como la generación de estándares internacionales que recomiendan a los Estados avanzar hacia la abolición, así mismo, hace referencia al marco normativo nacional que prevé la pena de muerte y concluye con las prohibiciones de índole internacional y nacional para la aplicación de la pena de muerte en los tipos penales que la contemplan como posibilidad.

La iniciativa de ley número 5100, de abolición de la pena de muerte, consta de once artículos, el primero decreta la abolición de la pena de muerte, en consonancia con lo dispuesto en el referido artículo 18 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Los artículos del 2 al 8 derogan las partes conducentes donde se hacía mención de la pena de muerte, como pena principal en el artículo 41, deroga el artículo 43 que contempla las prohibiciones para su aplicación y reforma quitando como sanción máxima la pena de muerte en el Decreto Legislativo Número 17-73 del Congreso de la República, de los delitos regulados en los artículos 131, 132Bis, 201, 201 Ter, 383 todos del Código Penal,



00000030

*Comisión de Derechos Humanos
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

así como, deroga el artículo 52 de la Ley contra la Narcoactividad, Decreto legislativo 48-92 del Congreso de la República; por su parte, el artículo 10 de la propuesta deroga el Decreto Legislativo Número 100-96, Ley que establece el procedimiento para la ejecución de la pena de muerte.

Con lo anterior, la iniciativa busca la derogación de todas aquellas normas que establecen la pena de muerte en la legislación ordinaria guatemalteca, con lo cual quedaría abolida la pena de muerte en Guatemala.

CONSTITUCIONALIDAD DE LA INICIATIVA

La Constitución Política de la República de Guatemala, contempla en su artículo 1 la protección a la persona, refiriéndose a que "el Estado se organiza para la protección de la persona y la familia; su fin supremo es la realización del bien común"; por su parte el artículo 3 desarrolla el derecho a la vida, indicando que "el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona"; lo anterior, complementado con el preámbulo constitucional en el cual se establece la primacía de la persona humana y el establecimiento del impulso de la plena vigencia de los derechos humanos, bajo un Estado democrático, la pena de muerte resulta contrario al modelo de Estado y a los derechos constitucionalmente establecidos.

Por su parte el artículo 18 constitucional referente a la pena de muerte, no establece la vigencia para la aplicación de la pena de muerte, al contrario, dicho precepto no es permisivo en cuanto a la imposición de la pena de muerte, puesto que el mismo, únicamente dispone los casos en que la pena de muerte no puede imponerse, además, en su último párrafo taxativamente le otorga al Congreso de la República la facultad para que a través de su potestad legislativa, pueda abolir esta pena por medio de una reforma ordinaria, sin la necesidad de que dicho procedimiento conlleve una reforma constitucional. Dejando claro el espíritu restrictivo y abolicionista con el cual fue redactada la Constitución Política de la República de Guatemala.

En el mismo sentido, se ha expresado la Corte de Constitucionalidad en la Opinión Consultiva presentada por el Presidente de la República, en la cual expreso que "...las Constituciones hacen referencia a la pena de muerte, pero no para



00000031

*Comisión de Derechos Humanos
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

establecerla, sino para fijar los casos en que no podrá imponerse y reforzar las garantías procesales de que dispone aquella persona que resultará condenada a dicha pena. Establecen excepciones, pero la referencia común es que la ley determina los delitos en que procede imponerla. Nuestra Constitución sigue una orientación restrictiva y abolicionista de la pena de muerte (...)¹.

Por su parte la iniciativa de ley número 5100 que pretende abolir la pena de muerte, es atinente conforme esa atribución estipulada en el artículo 18 constitucional y con la interpretación dada por la Corte de Constitucionalidad, puesto que, por medio de una ley ordinaria y conforme la atribución dada al Congreso de la República en el mismo precepto, busca abolir esta pena del ordenamiento jurídico ordinario donde se encuentra establecida como regulación o como consecuencia por la comisión de un delito. Es decir que en ningún momento dicha iniciativa debe ser entendida como una reforma al artículo 18 constitucional.

Por ende, la iniciativa de ley 5100 se ajusta a los parámetros ya estipulados en la Constitución para que en cualquier momento el Congreso de la República pueda abolir la pena de muerte.

VALORACIONES ATINENTES A LA PERTINENCIA

En Guatemala, la pena de muerte se encuentra regulada actualmente para los delitos de Plagio o Secuestro, Desaparición Forzada, Ejecución Extrajudicial, Parricidio, Caso de Muerte (Presidente o Vicepresidente) y el Artículo 52 (delitos calificados por el resultado) de la Ley contra la Narcoactividad, Decreto 48-92 del Congreso de la República, éste establece que, sí como consecuencia de los delitos tipificados en esa ley resultare la muerte de una o más persona, se aplicara la pena de muerte. Por su parte, el Decreto 100-96 del Congreso de la República "Ley que establece el procedimiento para la ejecución de la pena de muerte", regula la inyección letal como método para la ejecución de las personas condenadas a muerte por delitos comunes, sin embargo, durante los últimos 16 años, se han dado pasos importantes que van encaminados al establecimiento de una abolición progresiva de la pena de muerte.

Las últimas 2 ejecuciones se llevaron a cabo con el método de inyección letal el 29 de junio del año 2000. Luego de estas dos últimas ejecuciones, el ex Presidente

¹ Gaceta Número 29, Expediente número 323-93, página Número 140, sentencia 31-10-00.



00000032

*Comisión de Derechos Humanos
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

Alfonso Portillo quien desde el inicio de su mandato había expresado que no quería decidir sobre los recursos de gracia o indultos, expresó su apoyo a la derogación del Decreto 159 Ley de indultos vigente desde 1892, la cual fue derogada por el Congreso de la República mediante el Decreto número 32-2000 del Congreso de la República.

Este extremo, dejó a Guatemala sin una ley y sin un ente administrativo que tenga la facultad de conocer y resolver los recursos de gracia o conmutación de la pena. Sin embargo, este recurso se encuentra vigente, por encontrarse contenido en el corpus iuris internacional, tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo tanto, Guatemala al ser Estado parte de estos instrumentos internacionales, está obligado a garantizar el indulto, el recurso de gracia o la conmutación de la pena para las personas condenadas a muerte como un último recurso previo a proceder a una ejecución.

Pero la ausencia de quien deba tramitar y resolver dicho recurso, es lo que no permitió que las personas condenadas a muerte pudieran tener acceso a este derecho y a su vez que Guatemala mantenga en esa moratoria en las ejecuciones durante todos estos años. Sin embargo, en los años, 2008 y 2010, el Congreso de la República aprobó dos proyectos de ley, que pretendían devolver la facultad al Presidente de la República de conocer y resolver los recursos de gracia o conmutación de la pena de muerte. Pero dichas iniciativas no se ajustaban a lo ya ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias dictadas contra Guatemala en el año 2005, a los estándares internacionales y contenían inconstitucionalidades; las mismas no garantizaban un recurso efectivo para las personas condenas.

Por estos motivos, el ex Presidente Álvaro Colom, veto ambos Decretos, manteniéndose la ausencia de una normativa que regule la interposición y la resolución del recurso de gracia o conmutación de la pena.

La moratoria en las ejecuciones derivado de la ausencia de una legislación ordinaria que establezca el procedimiento y el ente facultado para conocer y resolver el recurso de gracia o conmutación de la pena, es un primer paso que ha permitido avanzar hacia la abolición progresiva de la pena de muerte en Guatemala.

B



00000033

*Comisión de Derechos Humanos
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

Desde el año 2000 a la fecha, diversos actores estatales y no estatales, iniciaron acciones tendientes a contribuir a esa abolición progresiva de la pena de muerte, en un primer término, se interpusieron dos denuncias ante el Sistema Interamericano de protección a Derechos Humanos, que, en el año 2005, tuvieron como resultado dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, en los casos Fermín Ramírez y Raxcacó Reyes Vs Guatemala.

En estos casos, la Corte IDH, determino la responsabilidad del Estado de Guatemala, por haber violado varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, CADH, en especial se refirió en el caso Fermín Ramírez, respecto al delito de asesinato regulado en la legislación interna en el Artículo 132 del Código Penal, el cual prevé una pena mínima de 25 y una máxima de 50 años de prisión, pero en su último párrafo, esta norma establece una condición, he indica que: "si se revelare una mayor particular peligrosidad del agente", se impondrá la pena de muerte en lugar de la pena máxima de prisión, con lo cual se violenta el derecho de defensa y el principio de legalidad establecido en todos los sistemas penales.

Por ello, la Corte IDH, resolvió que el Estado de Guatemala, era responsable de la violación al artículo 9 de la CADH, entre otras violaciones y ordeno que se reforme el Artículo 132 (asesinato) del Código Penal guatemalteco, suprimiendo la parte que refiere a la peligrosidad, con lo cual la reforma referida derogaría la pena de muerte para este delito. Aunque dicha reforma como obligación internacional emanada de la sentencia en mención nunca fue realizada, dicho extremo ya fue resuelto por la Corte de Constitucionalidad, como resultado de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad general parcial, resolviendo la Corte de Constitucionalidad en sentencia del 11 de febrero del 2016, dentro del expediente número 1097-2015, contra la frase del artículo 132 del Código Penal que refiere a la peligrosidad: resolviendo dar con lugar dicha acción, respecto de las violaciones de los artículos 12, 14, 17 y 19 constitucionales, con lo cual expulsa del artículo 132 del Código Penal, la frase antes citada.

En el caso Raxcacó Reyes, la Corte IDH, entró a analizar las reformas que se realizaron al delito de Plagio o Secuestro, contenido en el artículo 201 del Código Penal, realizadas en los años 1994, 1995 y 1996, derivado que durante estas modificaciones se extendieron conductas sancionadas con pena de muerte que no se encontraban reguladas al momento que Guatemala ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el año 1978. Reformas en donde no se

R

JF



00000034

*Comisión de Derechos Humanos
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

observó la Convencionalidad. Sin embargo, la última reforma realizada mediante el Decreto 81-96, dejó establecida la pena de muerte como sanción única, dejando sin posibilidad al juzgador de poder evaluar cada caso concreto y decidir sobre la pena correspondiente a aplicar.

En ese sentido, la Corte IDH, decidió que con las reformas al Delito de Plagio o Secuestro, el Estado de Guatemala era responsable de la violación al artículo 4.2 de la CADH, entendiendo que con la misma se había extendido la aplicación de la pena de muerte, puesto que si bien mantuvo el nomen iuris del tipo penal, cambio los supuestos de hecho, por lo tanto, ordenó que se debe modificar dicho precepto legal, en el cual deben estipularse con claridad las distintas formas de plagio o secuestro y en ningún caso se debe ampliar la pena de muerte a nuevos supuestos en contravención con la CADH.

La emisión de estas sentencias internacionales, significan otro avance en la abolición progresiva de la pena de muerte. A partir de ese logro, el Instituto de la Defensa Pública Penal, inició a interponer recursos de revisión en todos los casos de las personas condenadas a pena de muerte, todas por casos de plagio o secuestro y asesinato, logrando la conmuta de esas penas por la de 50 años de prisión, quedando al momento Guatemala sin ninguna persona condenada a la pena de muerte. De igual manera, otro dato importante lo constituye, que los tribunales del país, a partir del año 2005, no han emitido nuevas condenas a muerte.

Por lo anterior, aunque Guatemala no ha realizado las reformas a los delitos de Plagio o Secuestro y Asesinato, bajo las prohibiciones emanadas de las sentencias de la Corte IDH, no puede aplicar la pena de muerte para ninguno de estos dos tipos penales. Sin embargo, en iguales circunstancias se encuentran los demás delitos que la contemplan como posibilidad; en el caso de los delitos de Parricidio, Ejecución Extrajudicial y Caso de Muerte, también estipulan el elemento de peligrosidad como una condición para imponer la pena de muerte; en el caso de los delitos de Desaparición Forzada y el Artículo 52 de la Ley Contra la Narcoactividad, son tipos penales que fueron incorporados al Código Penal mediante reformas realizadas posteriormente a que Guatemala ratificara la CADH.

Esto constituye que todos los tipos penales vigentes en Guatemala, que prevén la pena de muerte, generan violaciones a la CADH y por ende no puede aplicarse para estos delitos; debiendo ser reformados todos, sin posibilidad de incluir la pena de muerte en dichas reformas, así mismo, tampoco se pueden crear nuevos



00000035

Comisión de Derechos Humanos
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

delitos en donde se estipule la pena de muerte como una posibilidad, con lo cual ya es imposible la aplicación de la pena de muerte en Guatemala, lo que hace pertinente la discusión y una eventual aprobación de la iniciativa de ley número 5100 "Ley de Abolición de la Pena de Muerte", con lo cual formalmente quedaría derogada de la legislación ordinaria toda disposición que refiera a la pena de muerte.

DICTAMEN

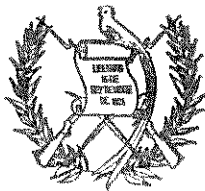
Atendiendo a sus antecedentes, al contenido de la iniciativa, pertinencia y a la atribución dada al Congreso de la República en el artículo 18 constitucional, así como a las prohibiciones existentes para aplicar la pena de muerte en Guatemala, habiendo estudiado la presente iniciativa, las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales, Reformas al Sector Justicia y Derechos Humanos, emiten **DICTAMEN FAVORABLE CONJUNTO** a la iniciativa de ley número 5100 que pretende aprobar la "Ley de Abolición de la Pena de Muerte"; pase al Pleno del Congreso de la República, para su debate.

DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A LOS TRES DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

RONALD ESTUARDO ARANGO ORDOÑEZ
PRESIDENTE

EDGAR ARMANDO SANDOVAL TRIGUEROS
VICEPRESIDENTE FCN

JULIO FRANCISCO LAINFESTA RIMOLA
SECRETARIO



00000036

Comisión de Derechos Humanos
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

En desacuerdo y firme
voto razonado Fernando Linares.

FERNANDO LINARES BELTRANENA
PAN

AMILCAR DE JESÚS POP AC
WINAQ

HECTOR LEONEL LIRA MONTENEGRO
ENCUENTRO POR GUATEMALA

JUAN CARLOS JOSUÉ SALANIC GARCIA
UNE

ALVARO ADOLFO VELÁSQUEZ
CONVERGENCIA

Voto razonado en Contra
ALVARO ENRIQUE ARZÚ ESCOBAR
UNIONISTA

RAUL ROMERO SEGURA
FUERZA

WALTER ROLANDO FÉLIX LÓPEZ
UNIDAD REVOLUCIONARIA GUATEMALTECA

ROBERTO RICARDO VILLATE VILLATORO
LIDER

ANIBAL ESTUARDO ROJAS ESPINO
VIVA

[Handwritten signature]

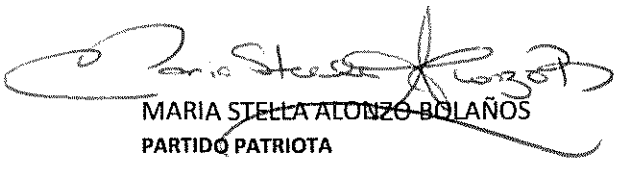


00000037

Comisión de Derechos Humanos
Congreso de la República
Guatemala, C.A.



CARLOS RAFAEL FION MORALES
CREO



MARIA STELLA ALONZO BOLAÑOS
PARTIDO PATRIOTA

gfr

PR




00000038

Comisión de Derechos Humanos
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

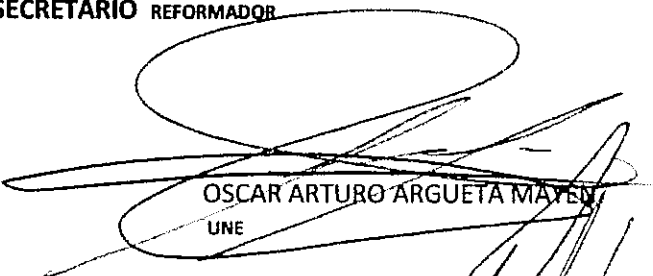
**INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
LEGISLACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES**

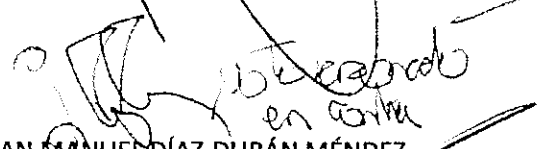

OLIVERIO GARCÍA RODAS
PRESIDENTE REFORMADOR

CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GIRÓN
VICEPRESIDENTE UNE


ALICIA DOLORES BELTRÁN LÓPEZ
SECRETARIO REFORMADOR


LUIS PEDRO ÁLVAREZ MORALES
EG


OSCAR ARTURO ARGUETA MAYÉN
UNE


JUAN MANUEL DÍAZ-DURÁN MÉNDEZ
VIVA


JOSÉ ALEJANDRO DE LEÓN MALDONADO
REFORMADOR


WALTER ROLANDO FÉLIX LÓPEZ
URNG

OSCAR ROBERTO FERNÁNDEZ MENDOZA
TODOS


JUAN RAMÓN LUQUÁN
TODOS

FERNANDO LINARES BELTRANENA
PAN





00000039

Comisión de Derechos Humanos
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

ERVIN ADIM MALDONADO MOLINA
FCN

AMILCAR DE JESUS POP AC
WINAQ

JUAN JOSE PORRAS CASTILLO
VIVA

MARÍA EUGENIA TABUSH PASCUAL DE SÁNCHEZ
VIVA

GERMAN ESTUARDO VELÁSQUEZ PÉREZ
PP

VOTO RAZONADO CONTRA
EDUARDO ZACHRISSON CASTILLO
PAN

Isr



00000040

Comisión de Derechos Humanos
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

INTEGRANTES DE COMISIÓN
REFORMAS AL SECTOR JUSTICIA



HECTOR LEONEL LIRA MONTENEGRO
PRESIDENTE E.G.



CÉSAR EMILIO FAJARDO MORALES
VICEPRESIDENTE IND

JUAN JOSÉ PORRAS CASTILLO
SECRETARIO VIVA

CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GIRÓN
UNE



CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ CASTELLANOS
MR



NINETH VARENCA MONTENEGRO COTTOM
E.G.



DORIAN DELFINO TABACENA GODÍNEZ
E.G.

RAÚL ROMERO SEGURA
FUERZA



CORNELIO GONZALO GARCÍA GARCÍA
TODOS



PK



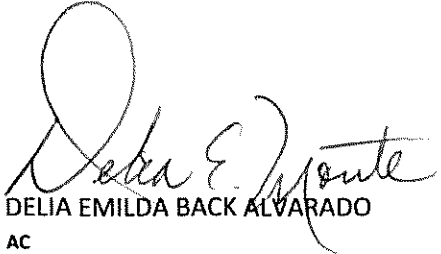
00000041

Comisión de Derechos Humanos
Congreso de la República
Guatemala, C. A.



MAYRA ALEJANDRA CARRILLO DE LEÓN

MR



DELIA EMILDA BACK ALVARADO

AC



JOSÉ ALEJANDRO DE LEÓN MALDONADO

MR



MARIA STELLA ALONZO BOLAÑOS

PP

R



*Correspondencia de Diputados
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

00000020

00000042

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
DECRETO NÚMERO _____

El Congreso de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO

Que es deber del Estado de Guatemala, respetar y garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de toda persona; Que de conformidad con el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagran el derecho a la vida.

CONSIDERANDO

Que el artículo 18 de la Constitución Política de la República, regula los casos en que la pena de muerte no puede ser impuesta, atendiendo al derecho internacional de los derechos humanos, con un claro espíritu abolicionista, faculta al Congreso de la República para que pueda decretar la abolición de la pena de muerte; Que el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que el Estado de Guatemala no podrá extender la aplicación de la pena de muerte, para delitos que no lo tenían contemplado al momento de su entrada en vigencia.

CONSIDERANDO

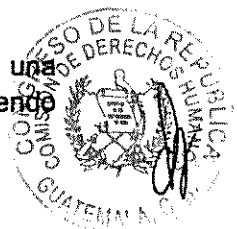
Que la aplicación de la pena de muerte produce consecuencias irreparables, incompatibles con el régimen penitenciario establecido en el artículo 19 constitucional, el cual establece que el mismo debe tender a la readaptación y rehabilitación social.

CONSIDERANDO

Que la Corte Interamericana en el año 2005, estableció en dos sentencias emitidas contra el Estado de Guatemala, que éste, había violentado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al extender la aplicación de la pena de muerte a nuevos delitos que no se encontraban regulados con esta pena al momento de haber ratificado dicho instrumento internacional.

CONSIDERANDO

Que en Guatemala se han venido desarrollando acciones tendientes al logro de una abolición progresiva de la pena de muerte, que hacen imposible su aplicación, haciendo





*Correspondencia de Diputados
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

00000021

00000043

necesario abolirla del ordenamiento jurídico y realizar las reformas penales a los delitos que contemplan dicha pena.

POR TANTO

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 inciso a) de la Constitución Política de la República de Guatemala.

DECRETA

LEY DE ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE

ARTÍCULO 1. Abolición de la pena de Muerte. Queda abolida la pena de muerte en Guatemala.

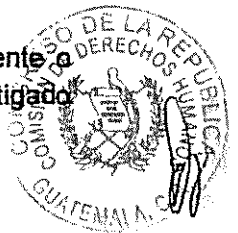
ARTÍCULO 2. Se reforma el artículo 41 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, quedando su texto final de la siguiente manera:

Artículo 41. Son penas principales: La de prisión, el arresto y la multa.

ARTÍCULO 3. Se deroga el artículo 43 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República de Guatemala.

ARTÍCULO 4. Se reforma el artículo 131 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, modificándose su texto, el cual queda de la siguiente manera:

Artículo 131. Parricidio: Quien conociendo el vínculo, matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años.





*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

00000022

00000044

ARTÍCULO 5. Se reforma el artículo 132 bis del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, modificándose su texto, el cual queda de la siguiente manera:

Artículo 132.-BIS- Ejecución extrajudicial. Comete el delito de ejecución extrajudicial, quien por orden, con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado, privare, en cualquier forma, de la vida a una o más personas, por motivos políticos; en igual forma comete dicho delito el funcionario o empleado público, perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para la comisión de tales acciones.

Constituye delito de ejecución extrajudicial, la privación de la vida de una o más personas, aún cuando no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de fuerza. Igualmente cometen delito de ejecución extrajudicial, los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando como resultado de su accionar resultare la muerte de una o más personas.

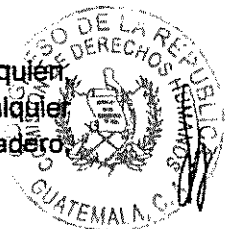
El reo de ejecución extrajudicial será sancionado con prisión de veinticinco a treinta años.

ARTÍCULO 6. Se reforma el primer párrafo del artículo 201 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, modificando su texto, el cual queda de la siguiente manera:

Artículo 201. Plagio o Secuestro. A los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquier otro propósito similar o igual, será sancionado con prisión de veinticinco a cincuenta años. En este caso no se apreciará ninguna circunstancia atenuante.

ARTÍCULO 7. Se reforma el artículo 201 TER del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, modificando su texto, el cual queda de la siguiente manera:

Artículo 201 TER. Desaparición forzada. Comete el delito de desaparición forzada quien por orden, con la autorización o apoyo de autoridades del Estado, privare en cualquier forma de la libertad a una o más personas, por motivos políticos, ocultando su paradero.





*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

00000023

00000045

negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el funcionario o empleado público, pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o de la aquiescencia para tales acciones.

Constituye delito de desaparición forzada, la privación de la libertad de una o más personas, aunque no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza. Igualmente, cometen delito de desaparición forzada, los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando cometan plagio o secuestro, participando como miembros o colaboradores de dichos grupos o bandas.

El delito se considera permanente en tanto no se libere a la víctima.

El reo de desaparición forzada será sancionado con prisión de veinticinco a cuarenta años.

ARTÍCULO 8. Se deroga el segundo párrafo del artículo 383 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República de Guatemala.

ARTÍCULO 9. Se deroga el artículo 52 de la Ley contra la Narcoactividad, Decreto Número 48-92 del Congreso de la República de Guatemala.

ARTÍCULO 10. Se deroga el Decreto Número 100-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley que Establece el Procedimiento para la Ejecución de la Pena de Muerte.

ARTÍCULO 11.- El presente decreto debe cobrar vigencia ocho días después de su publicación en el Diario de Centroamérica.

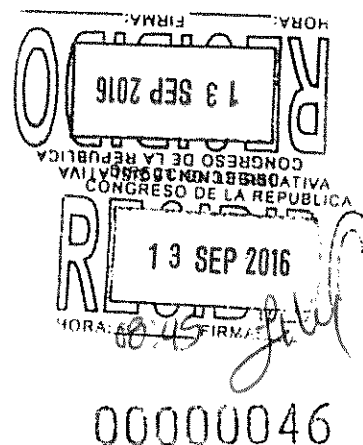
Pase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación.

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la Ciudad de Guatemala el ____ de ____ dos mil dieciséis.





*Correspondencia de Diputados
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*



08 septiembre, 2016

**VOTO RAZONADO DESAVORABLE A LA INICIATIVA DE LEY 5100
"LEY DE ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE"**

Honorable pleno:

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 18 estipula las restricciones para la aplicación de la Pena de Muerte. Por su parte, el Código Penal impone la pena de muerte para ciertos delitos calificados por su gravedad y brutalidad extrema. Por lo tanto, la pena de muerte existe con plena legalidad dentro del marco jurídico guatemalteco.

La pena de muerte pertenece al ámbito penal: es la persecución y castigo a un delito. El derecho penal sanciona proporcional y/o adecuadamente ante la magnitud del hecho delictivo cometido. En este caso, la pena máxima (el criminal paga su delito con su vida) es un castigo proporcional y adecuado ante ciertos crímenes aberrantes e inhumanos especificados por la ley.

Debemos considerar, en cuanto a la aplicación de la pena de muerte, varios factores actuales que aconsejan mantener esta condena: La restitución de la dignidad de la víctima y de sus familiares, la posibilidad de reincidencia de un criminal condenado por actos antisociales delictivos extremos, el efecto disuasivo de la pena de muerte sobre otros criminales, la aplicación de un castigo extremo a quienes han violado la ley de forma extrema y vil y, ante todo, la protección de la vida, la paz y la seguridad de todos los habitantes de Guatemala, obligación Constitucional primordial del Estado, tal como lo especifican los Artículos 2 y 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

La función de la pena de muerte es, ante todo, proteger a la persona humana y a la sociedad, al expulsar del seno de la misma a quienes atentan, de manera vil, contra la vida de los demás. Con la pena de muerte se busca la aplicación de castigo –justicia– proporcional al acto cometido, mientras que el asesino mató sin darle oportunidad a su víctima.



00000047

*Correspondencia de Diputados
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

De acuerdo a nuestro marco legal, el asesino que califica para la pena de muerte goza del debido proceso en primera y segunda instancia, tiene un defensor y puede recurrir a casación a la Corte Suprema de Justicia. Si en todas las instancias se prueba su culpabilidad ("sin fundamento en presunciones" de acuerdo a la Constitución de la República), aún tiene la posibilidad del indulto. Todo esto, es a diferencia de la víctima, a quien el asesino no dio oportunidad alguna de defensa. El asesino, libremente, al cometer sus actos, se coloca fuera de la dignidad que como humano le corresponde en relación a la pena capital.

De acuerdo a los estudios realizados por los Doctores Isaac Ehrlich y Zhiqiang Lu, de la Universidad de Nueva York en Buffalo, la aplicación de la pena de muerte Sí demuestra efectos disuasivos para potenciales criminales.^{1,2,3,4}

Aún cuando la Constitución Política de la República de Guatemala contempla la posibilidad de abolir la pena de muerte, consideramos que no es el momento apropiado por las siguientes razones:

1. Se registraron más de 23,000 víctimas de asesinato ejecutadas en Guatemala entre los años 2012 al 2015
2. Existen organizaciones criminales cuyo trabajo y/o profesión es el sicariato.
3. Actualmente, el sistema carcelario guatemalteco muestra gravísimas deficiencias que no impiden que los criminales cometan delitos, aún encerrados en centros de reclusión. Las mismas autoridades del Ministerio de Gobernación admiten que hasta el 80% de las extorsiones y asesinatos por encargo son ordenadas desde las prisiones.
4. La tasa de mortalidad por asesinatos en Guatemala es una de las más altas del mundo: de 34 a 39 por cada 100,000 habitantes según la fuente consultada.

De acuerdo al Artículo 117 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, un proyecto de ley deberá ser discutido y analizado en términos generales, deliberándose sobre la constitucionalidad, importancia, conveniencia y oportunidad del proyecto. La iniciativa 5100, que dispone aprobar la Ley de Abolición de la Pena de Muerte, es importante y se encuentra dentro del marco constitucional, pero en las actuales circunstancias, con la



00000048

*Correspondencia de Diputados
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

criminalidad rampante, las bandas dedicadas al sicariato por lucro, la deficiente situación de los presidios nacionales con crímenes dirigidos desde los centros de privación de libertad, es una iniciativa inconveniente e inoportuna.

Por lo anterior, los abajo firmantes, Diputados al Congreso de la República, votamos DESFAVORABLEMENTE sobre la Iniciativa de Ley 5100, que dispone aprobar la "Ley de Abolición de la Pena de Muerte".

1^o "Economics of Deterrence – Theory," *The New Palgrave Dictionary of Economics*, forthcoming, 2008

2^o Co-edited with Z. Liu, *The Economics of Crime*, 2006

3^o "The Deterrent Effect of Capital Punishment - A Question of Life and Death," *American Economic Review*, June 1975

4^o "The Deterrent Effect of Criminal Law Enforcement Journal of Legal Studies," June 1972

DIPUTADOS PONENTES:

fuerza.

UNIONISTA
Fernando Linares B.
PAN